

Felipe Arturo Ávila Espinosa

*Entre el Porfiriato y la Revolución*  
*El gobierno interino de Francisco León de la Barra*

México

Universidad Nacional Autónoma de México,  
Instituto de Investigaciones Históricas

2012

159 p.

(Serie Historia Moderna y Contemporánea, 44)

ISBN 10: 970-32-2779-1

ISBN 13: 978-970-32-2780-8

Formato: PDF

Publicado en línea: 31 de marzo de 2016

Disponible en:

<http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/porfiriato/revolucion.html>



INSTITUTO  
DE INVESTIGACIONES  
HISTÓRICAS

DR © 2016, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, México, Ciudad de México

## PAZ Y ORDEN, LAS VICISITUDES DEL GOBIERNO INTERINO

### *La pacificación*

Entre los múltiples problemas que tenía que resolver el interinato, el primero de ellos era el de la pacificación, que significaba el reconocimiento y subordinación de todas las fuerzas políticas a la autoridad estatal, y que implicaba poner fin a los enfrentamientos que habían continuado después de la firma del Convenio de Ciudad Juárez, es decir, el sometimiento de todos los actores políticos y militares, viejos y nuevos, a las nuevas autoridades, como primer paso para restablecer el funcionamiento de las instituciones. Había pues que poner orden en el ejército, en los rurales, en las policías locales y, sobre todo, en las innumerables bandas rebeldes, cuya actividad en muchos casos no se había detenido a pesar de la firma de la paz y del llamado de Madero para poner fin a las hostilidades.

Esa tarea, que requería convencer a las fuerzas insurgentes para que cesaran su actividad, que depusieran las armas y regresaran a sus lugares de origen, no podía ser llevada a cabo solamente por el gobierno federal. León de la Barra reconoció que lo mejor sería que Madero se hiciera cargo de someter a sus fuerzas, a lo que coadyuvaría su administración. Alfredo Robles Domínguez fue comisionado para esa encomienda en el centro del país. La primera medida que tomó fue ordenar a los jefes militares insurgentes de todos los estados y regiones que, habiéndose firmado la paz, debían suspender todos los ataques y actos hostiles contra el gobierno, poblaciones, rancherías y haciendas, reparar las vías de comunicación, conservar el orden y dar garantías a las vidas y propiedades de la población. Las tropas rebeldes que estuvieran en la capital del país, debían ser desalojadas e incorporadas con las que estuvieran más cerca en las zonas aledañas. Igualmente, en los casos en que hubiera fuerzas federales estacionadas en algunas ciudades y plazas a las que quisieran entrar los revolucionarios, se recomendaba prudencia y no provocar enfrentamientos. Quienes no acataran tales instrucciones serían severamente castigados.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Nombramiento de ARD como jefe de la insurrección en el D. F. y en los estados del Centro y Sur de la República, 15 de mayo de 1911; FIM a ARD, El Paso, 22, 23 de mayo; Circular de ARD a los jefes del Ejército Libertador, México, 24 de mayo de 1911; AARD, 1/5/2, 20,

Era la primera medida para materializar el acuerdo de paz y su cumplimiento significaría que los jefes insurrectos de todas las regiones aceptaban las condiciones impuestas por la negociación de Ciudad Juárez, que se subordinaban al liderazgo maderista, que aceptaban la paz y reconocían al gobierno constituido y que eran capaces de poner orden en sus filas, impidiendo desmanes, saqueos y comportamientos delictivos. Muchas de las bandas rebeldes, que habían proliferado y crecido notablemente en el mes de mayo de 1911, querían seguir ocupando ciudades y poblaciones para estar en una mejor posición cuando se reconociera la fuerza de los nuevos actores. El ejército federal, los rurales, y la parte más belicosa de las oligarquías, que no se resignaban a la capitulación prematura que se había decidido, no querían dejar el paso franco de las pocas plazas y ciudades importantes que todavía controlaban. Así pues, en los días que siguieron al pacto hubo que apaciguar a unos y otros, lo que en ocasiones se salió de control y produjo nuevos, pero más acotados enfrentamientos.

En general, los jefes militares maderistas acataron la instrucción sin muchas objeciones y, en algunas regiones, la medida pudo cumplirse sin mayores contratiempos. Cesaron los enfrentamientos, las tropas rebeldes conservaron sus posiciones o pidieron autorización para entrar a ciudades y poblaciones mayores donde pudieran abastecerse. En algunos lugares los jefes rebeldes incluso enviaron testimonios de la población sobre su buen comportamiento.<sup>2</sup>

Sin embargo, en otros lugares se dieron muchas fricciones y hubo enfrentamientos, por la resistencia de los federales a replegarse y entregar el control de las ciudades, por problemas en la comunicación o desacato de las órdenes militares y por el temor y el rechazo de una parte de la población de las localidades ante los abusos de las tropas rebeldes, que impusieron préstamos a los sectores pudientes para sufragar los gastos de sus tropas y, a menudo, permitieron o alentaron los saqueos y la violencia contra autoridades locales y sectores de la población civil.

22, 26, 1/6/34, 1/6/59. ARD a Zapata, 22, 23, 26, 27 de mayo; ARD a Antonio Barrios, jefe de la insurrección en Oaxaca, 24 de mayo; a Benigno Centeno, jefe de la insurrección en Puebla, 26 y 27 de mayo; a Manuel Asúnsolo, 23 de mayo; a Martín Espinosa, jefe de armas en Tepic, 29 de mayo; AARD, 4/17/4, 4/17/5, 4/17/30, 4/17/36, 4/18/1, 4/18/2, 4/19/10, 5/25/93, 5/23/5.

<sup>2</sup> Castillo Brito a ARD, Campeche, 26, 29 y 30 de mayo de 1911, en donde "vecinos prominentes" dieron fe sobre la honradez de sus fuerzas; Lindoro Castellanos a ARD, Ocosingo, 31 de mayo; Martín Espinosa a ARD, Tepic, 29 de mayo; comunidad de Nochistlán a ARD, 1 junio de 1911, donde alabaron el buen comportamiento del general Gabriel Solís "quien no impuso préstamos, a pesar de no tener para pagar a sus tropas"; AARD, 3/10/4, 10, 21, 24; 5/23/3; 4/18/8.

Así, ocurrieron problemas en la ocupación de varias ciudades y poblaciones después de firmada la paz. Ante el repliegue del ejército federal hacia las principales ciudades en abril y mayo de 1911, la desmoralización y desbandada en las fuerzas del orden y la incorporación de muchos revolucionarios llamados por sus contemporáneos “de última hora”, que buscaron sacar provecho personal de la situación y montarse sobre la ola revolucionaria para garantizar sus intereses y proteger el *statu quo*.<sup>3</sup> Ocurrieron muchas ocupaciones de ciudades medias por las fuerzas rebeldes durante el mes de mayo, varias de las cuales tuvieron lugar después del día 21. Desde el punto de vista de los jefes rebeldes, estas ocupaciones les permitirían fortalecer su presencia militar, obtener el reconocimiento de los líderes maderistas y del gobierno, tener una mejor posición para negociar beneficios personales y para sus fuerzas y tener acceso a los recursos materiales de las ciudades para sostener a sus tropas, a las cuales era más difícil abastecer en el campo.

La toma de Ciudad Juárez precipitó la caída en cascada de muchas ciudades y poblaciones medias, como reflejo de la desmoralización del ejército federal y del acicate que significó para los grupos revolucionarios darse cuenta que el régimen ya no se defendería. De este modo, los jefes insurrectos ocuparon en ese mes las plazas de Nogales, Agua Prieta, Hermosillo, Álamos, Guaymas, Ciudad Juárez, Casas Grandes, Chihuahua, Saltillo, Torreón, Lerdo, Gómez Palacio, Durango, Aguascalientes, Fresnillo, Culiacán, Colima, Tepic, La Barca, Autlán, Acapulco, Taxco, Iguala, Chilpancingo, Ometepepec, Cuautla, Cuernavaca, Jojutla, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Atlixco, Teziutlán, Huejotzingo, Izúcar, Tehuacán, Huamantla, Pachuca, Tlaxcalancingo, Tlaxcala, Córdoba, Orizaba, Tuxpan, Acayucan, Tierra Blanca, San Miguel Allende, Salvatierra, Acámbaro, Yuriria, Pénjamo, Silao, Celaya, León, Matehuala, San Luis Potosí, Zamora, Zitácuaro, Pátzcuaro, Uruapan, Morelia, Champotón, Campeche, Mérida y Ocosingo. En la primera semana de junio ocuparon Acapulco, Mazatlán y Toluca.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Un caso típico de oportunismo ocurrió con J. Trinidad Quintero, político porfirista de Colima, quien contaba con el apoyo del poder central y que el 18 de mayo de 1911 se proclamó súbitamente maderista, tomando el control de la capital estatal. Nombró al gobernador provisional, al jefe de armas y a los jefes políticos y luego presentó su candidatura para gobernador constitucional. Véase Gregorio Torres a DB, México, 29 de mayo de 1911; Archivo Gildardo Magaña, Centro de Estudios sobre la Universidad, UNAM (AGM), 5/T1/1. Casos similares se presentaron en Guanajuato, Estado de México y otras entidades.

<sup>4</sup> *El País*, 1, 12, 16 19, 20, 22, 23, 25, 26 de mayo de 1911; Castillo Brito a ARD, Campeche, 26 de mayo; Martín Espinosa a ARD, Tepic, 29 mayo; ARD a Miguel Zamora, ARD a C. Franco, 29 de mayo; ARD a Catarino Guerrero, 1 junio; G. Ruiz a gobernador de Guanajuato, 3 de junio; Cándido Navarro a ARD, Matehuala, 1 de junio, León, 4 de junio; Juan Delgado a ARD,

Estas ocupaciones fueron hechas casi en su totalidad de manera pacífica, ante la impotencia, la inferioridad numérica o el abandono de las plazas por las fuerzas federales, a las que se ordenó no interferir, y confirmaron el derrumbe del régimen porfiriano y la extensión y poder de la rebelión. En algunas capitales estatales, en que la insurrección prácticamente no existió o no tuvo suficiente fuerza para tomarlas, la ocupación por las fuerzas maderistas ganadoras ocurrió hasta que tomaron posesión los nuevos gobernadores provisionales nombrados por las legislaturas, de acuerdo con el alto mando maderista.

Otras ocupaciones, empero, originaron enfrentamientos e inestabilidad y obligaron a que el centro nacional, por conducto del ejecutivo, los mandos del ejército y los jefes maderistas, intervinieran para hacer valer el acuerdo de paz. Donde hubo problemas mayores fue en los lugares donde se conjugaron la resistencia del ejército federal a entregar las poblaciones, la oposición de los gobernadores porfiristas, las elites y las legislaturas locales a los nuevos gobernadores y jefes militares maderistas, el rechazo a los rebeldes por la población civil y la mayor autonomía o menor control de los jefes militares rebeldes sobre sus fuerzas. Los más notables disturbios ocurrieron en Guadalajara, donde el 23 de mayo los rurales dispararon sobre una manifestación popular que festejaba el triunfo maderista y pedía la salida del gobernador Manuel Cuesta Gallardo. La guardia estatal mató e hirió a 70 manifestantes por lo que al día siguiente la movilización se convirtió en motín que exigió y consiguió la renuncia de Cuesta Gallardo y su sustitución por David Gutiérrez Allende, en un golpe de mano de los grupos conservadores del estado que se adelantaron a Madero, quien había urgido a De la Barra a nombrar a Celedonio Padilla gobernador de la entidad. En Guanajuato, el principal dirigente de la revuelta, el profesor Cándido Navarro, tomó a fines de mayo las principales ciudades de esa entidad y del sur de San Luis Potosí con una alta dosis de violencia, que originó protestas de la población y aprehensiones de algunos de sus lugartenientes. En Tehuacán, el gobernador entregó pacíficamente la plaza a los jefes insurgentes Prisciliano

Zitácuaro, 28 de mayo; cónsul alemán en Guanajuato a ARD, 27 de mayo; ARD a Ambrosio Figueroa, 24 de mayo y 3 de junio; ARD a Enrique Añorve, 6 de junio; Angel Arch a ARD, 26 de mayo; ARD a I. Michel, 31 de mayo; ARD a Gral. Escalante, 31 de mayo; Manuel Asúnsolo a ARD, Cuautla, 24 de mayo; J. I. Lugo a ARD, Cuernavaca, 26 de mayo; Benigno Centeno a ARD, Texmelucan, 29 de mayo; Gabriel Gavira a ARD, Córdoba, 26 de mayo; Rafael Tapia a ARD, Orizaba, 27 de mayo; Maximino Martínez a ARD, Tierra Blanca, 27 de mayo; AARD, 3/10/5, 5/23/3, 3/11/9, 3/11/35, 3/11/52, 3/11/75, 5/21/14, 3/11/81, 4/16/42, 3/11/21, 4/17/8, 3/12/16, 3/12/21, 3/14/2, 3/13/16, 4/16/56, 4/17/8, 4/17/31, 5/24/19, 5/25/66, 5/25/81, 5/25/87; Portilla, 1995, p. 101-103; Ross, *op. cit.*, p. 162; Cumberland, *op. cit.*, p. 167.

García y Camerino Mendoza, para evitar saqueos y destrozos, empero, cuando la columna federal al mando de Aureliano Blanquet intentó recuperarla, los líderes maderistas, apoyados por la población, saquearon los comercios. En Cholula, el 29 de mayo las fuerzas rebeldes solicitaron permiso para ocupar la plaza, pero el comandante de los rurales los atacó, ocasionando un enfrentamiento en el que los alzados, con amplia superioridad numérica, consiguieron tomar la ciudad con mucha violencia: hubo quema de archivos, liberación de presos y varias decenas de muertos; en la capital poblana, el gobierno estatal reforzó la guarnición y no permitió el ingreso de los rebeldes a la ciudad sino hasta el 18 de junio, confinando a las tropas maderistas en la plaza de toros. En Tlaxcala, el gobernador Cahuantzi se negó a abandonar el poder y defendió la capital hasta que las fuerzas maderistas de Benigno Centeno la tomaron el 29 de mayo. En Durango, las fuerzas maderistas ocuparon la capital en la primera semana de junio y realizaron saqueos. En Chihuahua, la tensa situación entre las tropas federales y las insurgentes se rompió al ocurrir un enfrentamiento en Cuchillo Parado el 26 de mayo, ante lo que tuvieron que intervenir Madero y la secretaría de Guerra para hacer cumplir el armisticio; en la ciudad de Chihuahua, el general Lauro Villar, quien comandaba a una de las más fuertes y mejor armadas columnas federales, arguyendo que no había recibido instrucciones, se negó a entregar la plaza a las fuerzas de Orozco, hasta que finalmente cedió y permitió el ingreso del afamado líder maderista un mes después del convenio de paz, el 22 de junio. En Cuicatlán, Oaxaca, hubo enfrentamientos derivados de la decisión del gobernador interino Félix Díaz de desalojar a las fuerzas de Ángel Barrios —el principal líder de la revuelta en la región—. En Culiacán se rompieron las hostilidades entre federales y maderistas, luego de que 4 mil insurrectos pusieran cerco a la ciudad el 30 de mayo, a pesar de los llamados de Madero para respetar el cese al fuego, por lo que sugirió a León de la Barra que retirara al ejército de esa ciudad. En Mazatlán, los rebeldes sitiaron la plaza y cortaron el suministro de agua para obligar a la guarnición federal a rendirse el último día de mayo. Ambas ciudades capitularon al siguiente día. En Tepic, el líder de la revuelta, Martín Espinosa, al ocupar la capital aplicó algunas de las medidas que más alarma provocaron en las clases y sectores pudientes, como vales para víveres expedidos por él mismo —“por la ley del machete”, según dijo a los comerciantes que reclamaban— y cambió a todas las autoridades locales, con el aval de la población. En Tampico, tropas rebeldes ocuparon la población el 27 de mayo y precipitaron un motín popular en el que, al liberar a los presos de la cárcel, fueron reprimidos por el ejército federal que mató

a varios manifestantes.<sup>5</sup> La toma o ingreso de las tropas insurgentes a estas ciudades estableció un nuevo equilibrio de fuerzas y, aunque temporalmente permitió el cese de hostilidades, no eliminó los roces y tensiones con las legislaturas estatales, con el ejército y los rurales, ni con las oligarquías y la población civil. Así pues, la resistencia de las elites locales ante la revolución maderista, su oposición a ser afectados en sus intereses y a ser sustituidos por nuevas autoridades, provocó una nueva ola de violencia en las regiones que, sin embargo, pudo ser controlada en la mayoría de las regiones en las siguientes semanas, no sin dificultad.

Otro asunto que se complicó, por su propia naturaleza, fue el del magonismo en Baja California. Desde el comienzo de la rebelión maderista el núcleo dirigente del Partido Liberal Mexicano (PLM) se había deslindado del maderismo y había llamado a sus militantes a aprovechar la insurrección diferenciando claramente sus objetivos: mientras que Madero luchaba por un cambio político, los magonistas propugnaban por una revolución social que acabara con la propiedad privada, con el Estado y con las clases sociales.<sup>6</sup>

El PLM no aceptó los acuerdos de Ciudad Juárez y llamó a sus militantes a continuar luchando por la revolución social. Madero intentó negociar con el núcleo duro magonista y envió a Jesús Flores Magón y a Juan Sarabia a conferenciar con Ricardo en Los Ángeles. El PLM, empero, radicalizó su postura y denunció con más ahínco a Madero y sus compromisos políticos con el antiguo régimen. Para entonces, los magonistas de Baja California estaban en franca minoría y el movimiento había continuado dividiéndose. Fue solo cuestión de días su eliminación, para lo cual, sin embargo, el gobierno de León de la Barra, en razón de la lejanía e incomunicación de la región y por la participación de ciudadanos estadounidenses en el movimiento, tuvo que pedir autorización al gobierno de los Estados Unidos para trasladar tropas mexicanas por territorio norteamericano. Así, a finales de ju-

<sup>5</sup> FIM a ARD, El Paso, 24 y 27 de mayo de 1911; Manuel Plata a ARD, San Luis Potosí, 27 de mayo; Feliciano Jiménez a ARD, Cuicatlán, 31 de mayo; Ángel Barrios a ARD, Cuicatlán, 1 de junio; Agustín del Pozo a ARD, Puebla, 29 y 31 de mayo de 1911; AARD, 1/5/29, 1/5/41, 5/21/2, 4/18/4, 4/18/10, 4/19/43, 4/19/76; FIM a DB, Ciudad Juárez, 27 de mayo, Archivo Francisco I. Madero, Biblioteca Nacional, UNAM (AFIM-BN), Ms. M/T 1618; Lauro Villar a secretario de Guerra, Chihuahua, 8 de junio de 1911, Archivo Histórico de la Defensa Nacional (AHDN), XI/481.5/67/57-60. O'Dogherty, 2001, p. 119-120. *Diario del Hogar*, 2 y 16 de junio de 1911, *El País*, 5, 16 de mayo, 11 y 22 de junio de 1911, *El Imparcial*, 16 de mayo, 15 de junio de 1911. FIM a DB, Ciudad Juárez, 30 de mayo, AFIM-BN, Ms. M/T 1841. Próspero Cahuantzi a DB, Tlaxcala, 29 de mayo de 1911, AGM, 17/6/29; Alberto Ruiz a DB, Tepic, 29 de mayo de 1911, AGM, 1/1R/55/80-81. National Archives of Washington (NAW), MP7157/M274/1/1881, 2007, 2136, 2139, 2149.

<sup>6</sup> Taylor, 1992, p. 63-72.

no de 1911, los magonistas, sus aliados internacionalistas y mercenarios estadounidenses fueron completamente derrotados por el ejército federal. El magonismo dejó de tener, desde entonces, una participación directa en la revolución mexicana.<sup>7</sup>

### *El licenciamiento*

Un problema militar y político mayor para el gobierno interino y para Madero siguió siendo el desperdigado ejército maderista. Entre las medidas que fueron prioritarias para afianzar el control sobre las bandas maderistas rurales estuvo el impedir que siguieran realizando ataques contra las vidas y propiedades de hacendados, comerciantes y autoridades locales, así como la prohibición de que se liberaran los presos comunes, una práctica recurrente en muchas de las ocupaciones de los alzados en esos días.<sup>8</sup> Los responsables maderistas y del gobierno pensaban que liberar a los presos comunes alentaba la delincuencia y el bandidaje, fenómeno que proliferó en esos días como consecuencia del debilitamiento de la autoridad y el poder coercitivo estatal y porque la proliferación de la revuelta, sin duda, alentó tanto la participación de oportunistas y ambiciosos, como actos de desagravio y restablecimiento de justicia que a menudo eran interpretados por los representantes del orden como bandidaje. Tal actividad ocasionó muchos problemas a los jefes rebeldes, los distanció aún más de la dirección maderista y fue una fuente de descrédito y rechazo ante la población. La liberación de reos, alentada por varios jefes militares maderistas que justificaban que había que excarcelar a los presos políticos y luchadores contra la dictadura, en ocasiones fue hecha al margen de los líderes rebeldes, como actos que la población consideraba de justicia, aprovechando el poder de la multitud, el temor y la debili-

<sup>7</sup> “El Partido Liberal no ha hecho compromiso alguno ni con Díaz ni con Madero. Los tratados de paz no harán parar las actividades revolucionarias de los liberales... Madero no es la revolución...”, escribió Flores Magón a E. Kirk el 24 de mayo de 1911, *ARE*, LE 934. Taylor, *op. cit.*, p. 105-114.

<sup>8</sup> Circular de Alfredo Robles Domínguez a los jefes del Ejército Libertador para abstenerse de seguir liberando presos comunes, por constituir —según dijo—, un peligro para la seguridad y tranquilidad públicas y causar un grave mal a la causa revolucionaria, 28 de mayo de 1911; ARD a Trinidad Rojas, 28 de mayo, indicándole que reaprehendiera a presos que había liberado y se abstuviera de volver a hacerlo; Cándido Aguilar a ARD, Córdoba, 29 de mayo, donde informó que tomaba medidas para evitar evasión de presos comunes; AARD, 1/6/80, 3/15/31, 3/15/36-37, 5/25/118. Martín Espinosa, quien se caracterizó por ser uno de los más radicales de la primera etapa, al tomar posesión de Tepic, no solo liberó a todos los presos, sino que les repartió el dinero que encontró en la penitenciaría, véase Alberto Ruiz a DB, Tepic, 26 de mayo de 1911, *AGM*, 1/1R/15.



dad de las autoridades y de los órganos de control normales.<sup>9</sup> El alto mando maderista consideró que no podía permitirse eso y así, se multiplicaron los llamados para combatir esas actividades y para castigar a los responsables.

La situación política nacional, en términos generales, se pudo estabilizar en las semanas que siguieron al convenio de Ciudad Juárez. El siguiente paso era desarmar a esos contingentes y restituir el monopolio de la fuerza en manos del Estado nacional, para restablecer el orden y el funcionamiento de las instituciones. Acantonadas las tropas insurgentes en las principales poblaciones, una de las necesidades prioritarias, previas a su desmovilización, era su abastecimiento, que significaba un fuerte gasto en salarios, alimentos y servicios para un ejército que había crecido espectacularmente en los días posteriores del porfiriato y que en esos momentos no se sabía con exactitud su magnitud.<sup>10</sup> El nuevo régimen adquirió la responsabilidad de sostenerlas temporalmente, en lo que se les desmovilizaba, con recursos federales y estatales, terminando así con una situación irregular que había sido fuente de desórdenes y abusos, puesto que dichas tropas se abastecían con los recursos de las haciendas, de los comercios y de la población civil de las comunidades que ocupaban. El nuevo régimen tenía dinero para esa y otras tareas urgentes. La administración de Limantour había dejado las arcas federales con un fondo de 63 millones de pesos, después de haber cerrado el ejercicio con un superávit presupuestal de más del 60%. La primera disposición del nuevo ministro de Hacienda, Ernesto Madero, fue solicitar 8 millones de pesos del presupuesto federal para el sostenimiento de las tropas insurgentes, así como para su desarme y licenciamiento. Esa partida fue autorizada por el Congreso y, de esa forma, se comenzó a enviar las ministraciones de fondos a través de las oficinas de Hacienda en las entidades y de la secretaría de Gobernación. Ante la imposibilidad de distinguir entre los soldados que habían hecho mayores y más antiguos servicios a la causa maderista y los que se habían incorporado en el último momento, se decidió un criterio general: se pagaría una tarifa única en función del rango y del tipo de arma

<sup>9</sup> Trinidad Rojas a ARD, Chalco, 29 de mayo, donde le informó que los presos habían salido por petición del pueblo; Salvador Escalante a ARD, Pátzcuaro, 29 de mayo, en que notificaba que no habían sido los maderistas los que habían liberado a los presos, sino el pueblo amotinado y las nuevas autoridades, AARD, 3/15/33, 4/16/47.

<sup>10</sup> Posteriormente, con la información recogida en el proceso del licenciamiento de las fuerzas insurgentes, el 11 de septiembre de ese año, el entonces ministro de Gobernación Alberto García Granados informó que dichas tropas ascendían a 60 mil hombres. Véase Ponce de León, *op. cit.*, p. 176-179.

que se entregara, dándoles una cantidad adicional si dejaban también caballos o monturas.<sup>11</sup>

Empero, pronto surgieron dificultades, por los retardos y la insuficiencia de los pagos. Los jefes rebeldes hicieron reclamos constantes para que les enviaran fondos y se vieron a su vez en situación comprometida con sus tropas, al grado de presentarse desertiones y hasta insubordinaciones de los descontentos. De nuevo, la administración federal tuvo que reconocer situaciones de hecho y permitir que los jefes maderistas autorizaran que esas tropas se abastecieran con recursos de los gobiernos estatales y, más frecuentemente, mediante préstamos de los bancos y de los adinerados locales, con el compromiso escrito de restituirlos.<sup>12</sup>

En una situación de debilitamiento del Estado nacional y, prácticamente, de desaparición temporal de los mecanismos de control y represión tradicionales e, inversamente, ante la existencia de un poder nuevo, armado, se produjeron prácticas que los contemporáneos quejosos calificaron como “depredaciones” de las fuerzas maderistas y que consistieron básicamente en la imposición de su fuerza a la gente acomodada y común de las distintas regiones y en la aplicación de una justicia revertida, mediante la cual las bandas rebeldes y los grupos marginados usaron su fuerza para conseguir dinero, víveres, ata-

<sup>11</sup> Ernesto Madero a FIM, México, 27 de mayo de 1911; FIM a Ernesto Madero, Ciudad Juárez, 28 de mayo, *AFIM-BN*, Ms. 1603, 1714. Limantour a secretario de Relaciones Exteriores, México, 24 de mayo de 1911, *AJYL*, r. 65; Limantour, *op. cit.*, p. 305-6 y 310-13. Poco más de 600 mil pesos de ese fondo se usarían para pagar a Gustavo A. Madero los gastos y compromisos en que había incurrido en Estados Unidos para financiar la revolución, disposición que no se justificaba en un movimiento triunfante que pretendía ser ejemplo de una nueva moral. Dicho pago fue muy criticado y fue uno de los factores que le restó apoyo a Madero. Véase Vázquez Gómez, *op. cit.*, p. 265-274. FIM a ARD, 8 de junio de 1911, ARD a EVG, 9 de junio, EVG a FIM, México, 14 de junio, FIM a ARD, 26 de junio. *AARD*, 2/5/67, 2/5/69, 2/5/12, 2/5/81, 2/5/84. Emilio Vázquez Gómez le indicó a Robles Domínguez que habiendo sido pacificado el Estado de México, procediera a licenciar las tropas insurgentes “la mayor parte de las cuales se formaron después de las negociaciones de paz y muchos después de la firma del tratado”, EVG a ARD, 8 de junio; *AARD*, 2/7/84.

<sup>12</sup> Algunos jefes militares utilizaban la amenaza de imponer préstamos si no les llegaban los recursos, como Lindoro Castellanos, Ángel Barrios, Benigno Centeno, Cándido Navarro, Gabriel Gavira y Rafael Tapia. Todos ellos recurrieron a los préstamos locales. Véase Cándido Navarro a ARD, San Luis Potosí, 21 de mayo de 1911; Benigno Centeno a ARD, San Martín Texmelucan, 27 de mayo; Rafael Tapia a Cosío Robelo, Orizaba, 27 de mayo; Gabriel Gavira a ARD, Córdoba, 2 de junio; Ángel Barrios a ARD, Cuicatlán, 3 y 11 de junio; Lindoro Castellanos a ARD, Ocosingo, 6 de junio de 1911; *AARD*, 5/21/9, 3/19/69, 5/25/83, 5/25/186, 4/18/15, 4/18/61, 3/10/18. Las fuerzas zapatistas también fueron pagadas con fondos federales y préstamos que hizo el Banco de Morelos en esos días. Véase Abraham Martínez, jefe del estado mayor de Zapata a ARD, Cuernavaca, 31 de mayo, 1 de junio de 1911; recibos extendidos por Zapata al Banco de Morelos, 29 de mayo, 1 y 2 de junio; *AARD*, 4/17/70, 4/17/120, 4/17/80, 4/17/83, 4/17/84.

car a las instituciones, autoridades y personajes más aborrecidos de las elites y vengar agravios. La magnitud de la violencia popular es indicativa tanto de la legitimidad de los reclamos y agravios contenidos en contra de las elites, instituciones y autoridades, que no habían podido expresarse hasta entonces por el poder del Estado porfiriano, como de la nueva correlación de fuerzas que permitía que sectores excluidos y la gente común contaran con la capacidad de hacer oír sus voces, de hacer sentir su presencia y aun, de influir en cambiar a las autoridades locales, invirtiendo en muchos casos los papeles que habían desempeñado hasta entonces. Para las oligarquías y sectores acomodados y para los nuevos responsables del orden esa era una situación intolerable y por ello los juicios y opiniones que emitieron, que son los que prevalecen en las fuentes, hablan invariablemente de una violencia de masas que es catalogada sin más como delincuencia, desprovista de todo contenido de justicia social.<sup>13</sup>

Sin embargo, hubo también excesos y actos injustificados. La manutención de sus tropas, que podría haber sido considerado como un derecho legítimo de los rebeldes en virtud del objetivo reivindicatorio que los animaba, con mucha frecuencia traspasaba los límites considerados como justos y se convertía en algo que moralmente era percibido como un abuso, como actos ejecutados porque tenían la fuerza para imponerlos y no la razón, y porque prácticamente gozaban de impunidad. Muchas de las quejas que proliferaron en esos días eran también contra la forma injuriosa en que los jefes alzados imponían sus exigencias. Además, ocurrieron también actos de mayor violencia que no estaban inspirados por un vago sentimiento de justicia y venganza de agravios, sino que podían ser calificados como delictivos. Es indudable que se incorporaron a las filas rebeldes muchos individuos de todas las clases que querían sacar provecho personal con el movimiento y también ingresaron delincuentes. Las condiciones creadas por la revuelta facilitaron la ejecución de actividades que no te-

<sup>13</sup> El calificativo de bandolerismo para esas actividades proviene, evidentemente, de las fuentes disponibles: testimonios y quejas de personas y familias pudientes afectadas y de las autoridades de los diferentes niveles, es decir, los que estaban abiertamente en contra de la revolución y que consideraban cualquier ataque contra la propiedad "legítima" como ilegal, y una anomalía el hecho mismo de rebelarse. La clasificación de delitos para esas prácticas adopta siempre el punto de vista del orden jurídico vigente, de los criterios de la propiedad "legítima" y de los intereses materiales de los grupos privilegiados. La dirección maderista se hizo eco de esta interpretación. En los pocos casos en que existe la versión de los rebeldes, esos actos se justificaban por agravios percibidos como injustos, por un igualitarismo empírico y por la necesidad de abastecer a sus tropas. Esto no excluye que, en efecto, hubo abusos contra la población civil que no formaba parte de las elites que no tenían justificación, en cuyos casos a veces hubo resistencia y rechazo de los sectores afectados.

nían otra justificación que obtener dinero, recursos y poder, y vengarse o cometer agravios. La línea divisoria entre la necesidad de abastecer a sus tropas, usar la fuerza para una redistribución de los recursos y la riqueza, restablecer una justicia de la que casi siempre habían sido excluidos, y simples actos de bandidaje y criminalidad, a menudo era muy tenue. Y aunque ocurrieron una cantidad considerable de actos delictivos —a pesar de los intentos de algunos jefes rebeldes por impedirlos y castigarlos—, es probable que fueran más bien excepcionales, que no desvirtúan en conjunto el carácter popular de la protesta y la legitimidad de los reclamos de justicia, una vez que los grupos subalternos vieron que tenían los medios para hacerlo y que las fuerzas tradicionales del orden no podían impedirlo.<sup>14</sup>

Hubo regiones en donde estas acciones proliferaron más que en otras. En Guanajuato, las fuerzas del principal dirigente rebelde, Cándido Navarro, profesor y líder populista, radical —vinculado inicialmente a Alfredo Robles Domínguez y a los rancheros de Silao pero que pronto se había distanciado de ambos y actuado con una gran independencia de la dirección maderista—, se caracterizaron por ejercer una alta dosis de violencia en las ocupaciones de las principales ciudades de la entidad, mediante préstamos forzosos, quema de oficinas y archivos públicos y ataques a propiedades de connotados pobladores. El mayor exceso lo efectuó uno de sus lugartenientes, Miguel Zamora, en la ocupación de San Miguel de Allende, donde incendió el palacio municipal y saqueó varias casas, provocando protestas de las elites locales que hicieron llegar su reclamo hasta Madero y León de la Barra, quienes se hicieron eco de tales protestas y ordenaron a las autoridades locales que lo apresaran y castigarán. A pesar de las advertencias de que no permitiera esos abusos, Navarro liberó de la cárcel a Zamora y ése fue uno más de los motivos por los que Madero empezó a distanciarse y a tener animadversión contra él. En Guanajuato, la irrupción de la insurgencia maderista y la debilidad de las autoridades provocaron una mayor competencia política entre los grupos de poder locales por imponer su predominio, recurriendo a la movilización popular para esos propósitos. Empero, a menudo se salió de sus manos el control y ocurrieron 11 motines populares en las ciudades medias de la entidad, en el mes de mayo, luego de la toma de Ciudad Juárez, y 5 más en junio y julio.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Knight, 1996, I, p. 273-75; Henderson, *op. cit.*, p. 54, 59.

<sup>15</sup> FIM a ARD, El Paso, 27 de mayo de 1911; Enrique Aranda a ARD, Guanajuato, 26 de mayo; ARD a EVG, México, 29 de mayo; Oscar Braniff a secretario de Guerra, Guanajuato, 29 de mayo; srio. de Guerra a ARD, 30 de mayo; G. Ruiz a gobernador de Guanajuato; ARD a Juan Castelazo, gobernador de Guanajuato, 5 de junio; Castelazo a ARD, Guanajuato, 7 de

La inercia de la insurrección maderista continuó en algunas regiones hasta las primeras semanas de junio, antes de que el gobierno interino y los líderes maderistas civiles lograran desactivarla y estabilizar la situación política. En las primeras semanas del interinato la política mantuvo todavía agitadas sus aguas y llevó tiempo desmovilizar a la multiplicidad de bandas rebeldes que habían proliferado sobre todo en los días finales del gobierno de Díaz. Varios líderes rebeldes se resistieron a desmovilizarse y sus fuerzas se negaron a regresar a la situación anterior, al tiempo que las elites locales ofrecían resistencia para que no se alterara el *statu quo*.

Así, en los días que siguieron a la salida de Díaz continuó en algunos lugares la imposición de préstamos monetarios a los sectores pudientes y la exacción de alimentos, víveres y forrajes por las bandas insurrectas. Llama la atención que, en general, no se atentó contra el régimen de propiedad ni se cuestionó la legitimidad de las haciendas. Sin embargo, hubo regiones en donde la resistencia de las elites y oligarquías locales provocó una mayor dosis de violencia, venganzas y saqueos. De manera significativa en la zona del suroeste de Puebla, en Morelos y en el sureste y suroeste del Estado de México —la zona que sería el corazón del movimiento zapatista— se dieron enfrentamientos con una mayor polarización y radicalidad que en otros sitios. En las ocupaciones de Jojutla, Cuautla y otras ciudades de Morelos y Puebla, ocurrieron enfrentamientos violentos, destrucción de archivos, oficinas públicas, destrucción de puentes y vías de ferrocarril, liberación de presos y ataques contra comerciantes, hacendados, fábricas y autoridades. Incluso, es una de las zonas en donde se tiene noticia de las más tempranas ejecuciones de jefes políticos y de ataques y sabotaje contra las haciendas.<sup>16</sup>

La zona poblana se caracterizó por ser una de las regiones con mayor violencia y enfrentamientos entre los nuevos actores y los representantes de los intereses económicos dominantes. En los primeros días del gobierno interino ocurrieron ataques rebeldes contra haciendas en Teziutlán y Atlixco. En una de estas incursiones, en Santa Ana Zalmililco, los hacendados se negaron a proporcionar ganado a los in-

junio; AARD, 1/5/41, 3/11/10, 3/11/42, 3/11/1, 3/11/47, 3/11/74, 3/11/85, 3/11/91, 3/11/27. Blanco, 1998, p. 30-32, 34-38.

<sup>16</sup> Pablo Escandón a Díaz, Cuernavaca, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31 de marzo, 3 de abril de 1911, Colección Porfirio Díaz, Universidad Iberoamericana (CPD), legajo 70, docs. 6481-82, 6315-16, 6742, 6945-48, 6949, 7616-18, 7297-98. Felipe Ruiz de Velasco a ARD, Jojutla, 26 de mayo de 1911; ARD a Zapata, 28 mayo; ARD a Zapata, 1º de junio; *Memorándum sobre la situación política del estado de Morelos*, s/f; ARD a J. de la Macorra, 18 de junio; AARD, 1/6/44, 4/17/41, 4/17/76, 7/37/75, 2/7/161. LaFrance, 1987, p. 86-89.

surgentes y les dispararon, provocando el amotinamiento del pueblo que linchó al administrador; las fuerzas maderistas, una vez más, consideraron intolerables esas actitudes y apresaron y castigaron a los infractores. Varias haciendas del exgobernador porfirista de Puebla, Mucio Martínez fueron atacadas y saqueadas. En la hacienda de Antonio Martínez, cerca de Chiautla, éste fue muerto en el ataque que sufrió por los alzados.<sup>17</sup>

Incluso en Chihuahua, la inercia del movimiento se manifestó muy pronto contra la familia más poderosa de la entidad, el clan Terrazas-Creel, quien a pesar de que conservaba su poderío económico, una notable influencia política y la solidaridad del gobierno central para proteger sus intereses, sufrió la invasión de dos de sus haciendas desde fines de mayo de 1911 y la confiscación y venta de 3 mil cabezas de ganado por una fuerza encabezada por José de la Cruz, quien desafió los intentos por reducirlo al orden hechos por el gobierno estatal de Abraham González. Dos meses después, las haciendas *Orientales* y *Amapolas*, cerca de Ojinaga, seguían ocupadas y el ganado había sido vendido en su mayor parte en los Estados Unidos.<sup>18</sup>

Todos estos actos no podían ser permitidos por los defensores del orden. Al negarse el gobierno interino y la dirección maderista a crear nuevas instituciones y un nuevo orden jurídico, tales actos —desde la lógica de la razón de Estado— eran ilegítimos y debían ser reprimidos. Si eran originados por reivindicaciones legítimas de transformación social, tendrían que canalizarse por las vías institucionales. Si se les identificaba con bandolerismo, tenían que ser reprimidos. Los líderes maderistas civiles actuaron al unísono con el gobierno federal en la defensa de las oligarquías locales y condenaron y castigaron esas actividades. No permitieron, tampoco, que se comenzara a generalizar una reforma agraria de *facto*. Así, el maderismo y el gobierno interino hicieron causa común en la defensa de los intereses de las clases dominantes y tuvieron temporalmente éxito: la mayoría de las fuerzas rebeldes fueron desmovilizadas y se logró mantener el *status quo*, aunque la presión popular por hacer cambios sustantivos no pudo ser totalmente nulificada y se continuó expresando regionalmente.

En esas semanas, al cúmulo de instrucciones que salían del cuartel general maderista para garantizar el orden, tarea que fue implementada

<sup>17</sup> Juventino Reyes a ARD, Puebla, 26 de mayo de 1911; José Flores a ARD, Puebla, 28 de mayo, srio. particular de De la Barra a ARD, México, 29 de mayo, Agustín del Pozo a ARD, Atlixco, 5 y 8 de junio de 1911, AARD, 4/19/2, 4/19/34, 4/19/54, 4/19/102, 4/19/113. LaFrance, *op. cit.*, p. 118.

<sup>18</sup> Regino Ramos a Enrique Creel, Presidio, Texas, 27 de mayo de 1911, Enrique Creel a DB, México, 3 de junio, 4 de julio de 1911 (AGM) 2/1/53/95, 2/1/52/91, 2/4/42/73.

en el centro del país por Alfredo Robles Domínguez —quien fungió en esos primeros días como el principal operador político de Madero y como un verdadero ministro de Gobernación alterno, con quien se comunicaban directamente los jefes del Ejército Libertador, al margen de León de la Barra y de Emilio Vázquez Gómez—,<sup>19</sup> se agregó una instrucción más, culminación natural de ese proceso: la decisión de los altos mandos maderistas para que en la entrada triunfal de Madero a la capital del país —el mayor acontecimiento simbólico de la nueva etapa—, no estuvieran presentes las tropas revolucionarias, sino solamente los principales dirigentes, acompañados por sus estados mayores. Madero había renunciado a tomar militarmente la capital del país y consumado el triunfo no quiso tampoco que las tropas rurales que habían sido el sostén fundamental de su victoria entraran junto con él a celebrar la hazaña. La organización de la recepción a Madero demostró que los líderes maderistas quisieron tener una celebración ordenada, que no alarmara a la población capitalina y que fuera un ejemplo de la paz y la concordia, de la reconciliación que se buscaba. Se temía que ese escenario no fuera posible si venía el grueso de los ejércitos rebeldes y por eso se les excluyó.<sup>20</sup>

La población citadina se volcó a recibir a Madero, el 7 de junio de 1911, en una de las mayores concentraciones populares que hubieran tenido lugar hasta entonces. La multitud acompañó a Madero hasta Palacio Nacional, donde lo esperaba León de la Barra. Juntos, el presidente interino y el líder de la insurrección salieron al balcón central a recibir el saludo de los capitalinos. Luego, se reunieron para ponerse de acuerdo en la estrategia a seguir y definir el papel y las tareas que cada uno se encargaría de llevar a cabo para conseguir el objetivo común de consolidar el proceso de paz y restablecer el orden y el funcionamiento de las instituciones.<sup>21</sup>

Así como había sido difícil establecer la paz, el proceso de licenciamiento de las fuerzas rebeldes también se complicó. Una parte importante de las tropas maderistas había alcanzado una relativa situación de privilegio y reconocimiento social a la que no era fácil renunciar. Los soldados maderistas habían obtenido una situación material mejor dentro del movimiento que la que tenían antes: contaban con un empleo mejor pagado que las faenas agrícolas y, sobre todo, habían

<sup>19</sup> El papel de Robles Domínguez tuvo que ser reconocido incluso por De la Barra, quien en ocasiones le pidió que ordenara a fuerzas rebeldes que no atacaran ciudades y no provocaran desmanes, véase A. de la Peña a ARD, 29 de mayo de 1911, AARD, 4/19/47.

<sup>20</sup> Invitaciones de ARD a A. Figueroa, a la familia Serdán, a Camerino Mendoza, a Agustín del Pozo, a Gabriel Gavira, a Emiliano Zapata, AARD, 3/12/20, 4/19/96-98, 5/25/200.

<sup>21</sup> Ross, *op. cit.*, p. 170, Henderson, *op. cit.*, p. 59.

UNAM - IHH

obtenido prestigio social y la posibilidad de conseguir tierras.<sup>22</sup> El movimiento insurreccional había permitido que la gente común saliera de la rutina cotidiana, que conociera otros lugares más allá de su comarca, que anduviera armada y a caballo y que disfrutara de ese poder nuevo al que súbitamente habían tenido acceso para realizar cosas que en otras condiciones no hubieran podido hacer, como vengar afrentas, impedir que los humillaran, o que la justicia los excluyera, manifestaciones de una nueva fuerza que también, en ocasiones, produjo abusos con un cierto grado de impunidad. Aunque no todos los combatientes habían disfrutado las ventajas de esa situación, es indudable que la revolución significaba un cambio en sus vidas y en sus aspiraciones, y que constituían un grupo que había creado intereses, afinidades e identidad a los que no era fácil renunciar. En el imaginario colectivo, comenzaron a aparecer imágenes de nuevos héroes, hazañas, corridos y leyendas en donde muchos de los protagonistas eran personajes de los sectores populares hasta entonces excluidos por el sistema.<sup>23</sup> La resistencia al desarme provino, por tanto, no sólo de los líderes que aspiraban a cargos dentro del gobierno y las fuerzas armadas regulares, sino también de la tropa que no se sentía tentada de regresar a sus antiguas ocupaciones.

En esas condiciones, siguieron presentándose roces y disputas al interior de las filas maderistas y entre éstas y las fuerzas del orden. Uno de los mayores enfrentamientos provocados por las tensiones entre las tropas federales y las insurgentes ocurrió en la segunda semana de julio de 1911, con motivo de la visita de Madero a la capital poblana. Como circularon rumores de que habría un atentado contra Madero, el ministro de Gobernación comisionó a Abraham Martínez, el jefe del estado mayor de Zapata, para que investigara y producto de sus pesquisas se descubrió un complot en el que estaban involucrados un hijo del antiguo gobernador de la entidad, Mucio Martínez, y dos diputados poblanos. La detención de esos personajes provocó la protesta del gobernador Rafael Cañete, de León de la Barra y de Madero mismo, quienes ordenaron su inmediata liberación y apresaron al jefe zapatista por abuso de autoridad. Pocos días antes había habido un enfrentamiento en la cercana fábrica de Metepec y los ánimos estaban muy caldeados, por lo que fue fácil que el ejército montara una provocación contra las fuerzas maderistas, produciéndose un fuerte combate en el que la superioridad federal dio por resultado una matanza brutal de seguidores de Madero, en la que perecieron

<sup>22</sup> Henderson, *op. cit.*, p. 56-57.

<sup>23</sup> Rueda, *op. cit.*, p. 16-17; Monsiváis, *op. cit.*, p. 164-166.



más de 80 personas, incluidos mujeres y niños. La indignación ante la masacre hizo que, en su huida, las fuerzas maderistas atacaran haciendas y fábricas cercanas a Puebla, que culminaron con un motín en la fábrica *La Covadonga*, en la que mataron a varios súbditos alemanes y españoles. Finalmente el ejército controló la situación y apresó a los líderes maderistas implicados. Ante esa situación límite, Madero hizo una de las tomas de partido que le restó más apoyo popular entre sus seguidores, al dar más peso al motín popular y saqueo de *La Covadonga* que a la masacre de sus seguidores, condenó a las fuerzas maderistas como responsables de los enfrentamientos y justificó la actuación del ejército. El acontecimiento lo convenció de la necesidad de acelerar el desarme de las fuerzas rebeldes y congraciarse con el ejército; pidió el ascenso de Aureliano Blanquet —el oficial federal que dirigió la represión—, y declaró que la revolución había terminado, por lo que los revolucionarios debían regresar a sus casas y el pueblo no debía ver al ejército como enemigo.<sup>24</sup>

El asunto de Puebla tuvo un enorme costo político para Madero, pues lo enfrentó abiertamente con una parte de sus seguidores que lo habían querido defender, profundizó sus diferencias con el ministro de Gobernación, Emilio Vázquez Gómez, a quien descalificó por su conducta, y comenzó a ser rehén del ejército federal. El grupo maderista mostró que las fisuras que afloraron en Ciudad Juárez seguían profundizándose. Además, a pesar de sus intentos de conciliación con el gobierno interino, con las elites y el ejército, a los ojos de éstos fue evidente que no tenía control sobre sus fuerzas; por tanto, que no podían confiar mucho en él y eso los envalentonó para tener una actitud más agresiva.

El desarme creó descontento, desilusión e inconformidad en las filas maderistas. Los jefes rebeldes esperaban que Madero y el nuevo régimen les dieran el reconocimiento político que creían merecer y aspiraban a ocupar un lugar relevante dentro de la nueva administración. Sin embargo, para Madero y León de la Barra estaba muy claro que la misión de los jefes insurgentes había concluido desde el momento en que Díaz se había ido y se había constituido un nuevo gobierno. En el reacomodo de la administración pública no fue incorporado ninguno de los nuevos líderes ni tampoco se permitió que algunos de los

<sup>24</sup> Cosío Robelo a ARD, Puebla, 13 y 17 de julio de 1911, *AARD*, 2/8/43, 2/8/60; Madero a León de la Barra, Puebla, 13 de julio de 1911; De la Barra a Cañete, 15 y 21 de julio, 24 de agosto de 1911, *AGM*, 17/10/489, 17/10/491, 17/10/495, 17/10/500, 17/10/511. LaFrance, *op. cit.*, p. 122-27. Vázquez Gómez, *op. cit.*, p. 311-347. Las sospechas del complot contra Madero no habían sido un invento, como lo demostró la investigación que se hizo poco después, véase LaFrance, *op. cit.*, p. 127-129.

más populares, como Pascual Orozco, Cándido Navarro y Gabriel Gavira llegaron a la gubernatura de sus respectivos estados, en donde eran personajes con arrastre. Para Madero y De la Barra estaba muy clara la división de clase y cultural entre esos dirigentes y el personal que habían escogido para el gobierno de los estados. Coincidían también en que el carácter militar era incompatible y negativo para la política y la función pública. Así pues, lo único que el nuevo régimen permitió para algunos de los nuevos y ambiciosos jefes militares surgidos de la revuelta, fueron puestos de segundo nivel, en las tropas rurales de sus entidades. Este desplazamiento y la falta de sensibilidad política para incorporar a los líderes de las nuevas fuerzas populares emergentes, fue una de las decisiones que más contribuyeron a debilitar al maderismo y estuvo en el origen de varias de las principales rebeliones que ocurrieron en el interinato y durante el gobierno constitucional de Madero.<sup>25</sup>

Con las tropas insurgentes pasó un fenómeno similar. Aunque algunos formaron parte de las fuerzas rurales o de las milicias estatales, muchos se sorprendieron y frustraron con el poco reconocimiento y paga que se les dio por sus servicios, y regresaron a sus localidades con enojo. Algunos más decidieron que era tan poco lo que les daban que más valía quedarse con las armas, municiones y caballos y fueron caldo de cultivo muy fértil para las protestas y rebeliones que comenzaron a gestarse contra el interinato y contra Madero desde esos tempranos días. León de la Barra, ante el poco avance que tenía el licenciamiento, emitió un ultimátum a mediados de junio: las tropas revolucionarias deberían desarmarse inmediatamente; si no lo hacían, a partir del primero de julio serían considerados como delincuentes y combatidos.<sup>26</sup>

Las tensiones y enfrentamientos ocurridos generaron en Madero y en sus colaboradores civiles un sentimiento ambiguo y contradictorio ante el desarme: por una parte, reforzaron su convencimiento de que era una fuente de conflictos, que había que desactivar lo antes posible. Pero también pudieron darse cuenta que la lealtad y la confianza del ejército y los rurales no estaba garantizada, a pesar de los esfuerzos reiterados para ganárselos y que en la vorágine política que estaba teniendo lugar era necesario contar con fuerzas propias, con lealtad probada. En esto parece haber habido consenso dentro del

<sup>25</sup> Knight, 1995, I, p. 270-271.

<sup>26</sup> Fidencio García a ARD, Zamora, 7 de junio de 1911; Pedro Carbajal a ARD, Acayucan, 12 de junio; A. del Pozo a ARD, Puebla, 10 de junio; Salvador Escalante a ARD, Morelia, 10 de junio; A. Figueroa a ARD, Bravos, Guerrero, 18 de julio de 1911; AARD, 4/16/84, 5/25/5215, 4/19/11, 4/16/87, 2/8/63.

maderismo y fue una de las primeras y mayores diferencias con De la Barra y los representantes del régimen porfiriano. El problema estaba en la magnitud y en la selección de las fuerzas que deberían conservarse. Madero, Robles Domínguez y González Garza pensaron que debía ser solamente una porción reducida y escogieron a algunos destacamentos en lugares clave, como La Laguna, en donde la familia Madero tenía grandes intereses. La coordinación nacional de estos grupos irregulares la tendría la secretaría de Gobernación y el Inspector General de Rurales; empero, los dirigentes maderistas no pudieron ponerse de acuerdo en esa tarea. La ambición de Emilio Vázquez Gómez, quien quiso aprovechar su cargo para tener el control de dichas fuerzas y tratar de que fueran lo más numerosas posibles, generó tensiones crecientes con De la Barra y con Madero mismo. Algunos de los nuevos gobernadores, ante las dificultades para vencer la resistencia de las clases conservadoras, se percataron también que necesitaban conservar al menos una parte de dichas fuerzas y empujaron por tener autorización y recursos para ello. En estados como Sonora, Chihuahua y Coahuila, los gobernadores maderistas lograron conservar a una parte de las fuerzas rebeldes como tropas irregulares y eso le dio mayor solidez a su gobierno y fuerza propia.<sup>27</sup> Y, finalmente, los propios líderes y milicianos rebeldes quisieron también seguir siendo actores centrales en el curso de los acontecimientos. Adicionalmente, tanto el gobierno provisional como los maderistas temían que la gente desmovilizada, al regresar a sus lugares, no pudiera emplearse y que la falta de trabajo fuera motivo de conductas delictivas, por lo que hicieron llamados para proporcionar empleos dentro de la burocracia estatal. Así, el desarme se volvió una situación enormemente complicada que no se pudo resolver satisfactoriamente dada la gama de intereses distintos y encontrados que estaban en juego.<sup>28</sup>

Con todo, se pudo desarmar a la mayor parte de las tropas insurgentes y así lo notificó el gobierno federal en octubre de ese año. Alberto García Granados —quien sustituyó a Emilio Vázquez Gómez en la cartera de Gobernación a principios de agosto de 1911—, informó al Congreso federal que de los 60 mil hombres que componían las fuerzas insurgentes al término de la rebelión más de la mitad se habían regresado a su casa cuando terminaron las acciones. Habían per-

<sup>27</sup> Esas fuerzas fueron la base para derrotar meses después a la más importante de las rebeliones antimaderistas, la de Pascual Orozco, y fueron también la base que permitió la resistencia al golpe de Estado huertista que terminó con el gobierno de Madero.

<sup>28</sup> FIM a Emilio Madero, Ciudad Juárez; Emilio Madero a FIM, 15 junio de 1911; AFIM, Ms. 1712, 19/720; Juan Castelazo a EVG, 7 junio; FIM a ARD, 26 de junio; AARD, 3/11/90, 1/5/84; Abraham González a DB, AGM, 18/2/44.

manecido en filas 25 mil. A esos fue a los que se procedió a licenciar, entregándose a cada uno entre 40 y 125 pesos por arma, por lo cual se habían gastado en el desarme y mantenimiento provisional de las tropas 5.8 millones de pesos. El presupuesto federal se había depositado en los gobiernos estatales, quienes habían hecho las liquidaciones. A principios de octubre, se habían licenciado ya 16 mil, por lo que restaban solamente entre 8 y 9 mil. Esos contingentes eran los casos complicados y los que seguirían dando dolores de cabeza al régimen.<sup>29</sup> Al día siguiente, habiéndose acabado la partida inicial, la secretaria de Hacienda solicitó una ampliación de 12 millones de pesos para concluir el licenciamiento.

Mientras se efectuaba el desarme, empero, continuó habiendo disturbios. Las manifestaciones de descontento fueron más frecuentes en el centro y en el sur del país, en donde la rebelión se había dado de manera más espontánea, autónoma y dispersa que en el norte, con una menor disciplina y una menor subordinación a las jerarquías de la dirección maderista. En ese proceso destacaron jefes surgidos de abajo, con un fuerte arraigo local, que fueron conocidos por su populismo. Entre los más connotados estuvieron Benigno Centeno y Camerino Mendoza en Puebla, Gabriel Gavira en Veracruz, Cándido Navarro en Guanajuato, Gabriel Hernández en Hidalgo, Juan Banderas en Sinaloa, Martín Espinosa en Tepic, Calixto Contreras en Durango y Emiliano Zapata en Morelos. Estos líderes comenzaron a ser conocidos por la opinión pública de la época y a ser estigmatizados por las noticias negativas que llegaban de su comportamiento. Esos líderes populares, junto con Orozco y Villa en Chihuahua, habían sido uno de los soportes principales de la insurrección maderista. No obstante, para los viejos y nuevos defensores del orden esos jefes militares no significaban un aliado sino un problema. A todos ellos el maderismo los excluyó de los principales puestos políticos en el gobierno federal y local; también fueron hechos a un lado en las estructuras militares del ejército y de los rurales. Sin embargo, algunos de ellos no renunciaron a querer ocupar el lugar que creían merecer en el nuevo acomodo de los poderes e instituciones y opusieron una fuerte resistencia a los intentos por desmovilizar a sus fuerzas y hacerlos a un lado de la escena.

<sup>29</sup> Informe de García Granados al Congreso, 11 de octubre de 1911. En la comparecencia, refiriéndose a los que faltaban por licenciarse, señaló: "el licenciamiento de estas fuerzas ha sido la más difícil y penosa labor del gobierno interino; la más penosa, por la imposibilidad material en que el gobierno se encuentra de recompensar ampliamente, como lo deseara, los servicios de los revolucionarios; la más difícil, por el peligro de que los exrevolucionarios descontentos, al encontrarse sin medios de subsistencia, promuevan nuevos trastornos del orden público...", Ponce de León, *op. cit.*, p. 176-179.

